



Observatorio Regional de los
Derechos Humanos y el DIH

Julio – septiembre de 2021 / Número 6

Observando Al Derecho

Contenido

Presentación.....	1
Evolución de la situación de violencia política	2
EL triángulo del Telembí la joya de la corona que se disputan los actores armados.....	¡Error!
Marcador no definido.	
El cuerpo de las mujeres sigue siendo botín de guerra en Nariño	4

Presentación

El boletín **Observando Al Derecho** es una publicación trimestral de referencia y consulta en materia de la situación de la violencia sociopolítica, derechos humanos y campos afines que la Fundación Desarrollo y Paz, FUNDEPAZ edita en el marco del proyecto Misión de Observación del Proceso de Paz y Posconflicto (MOP) de la Sociedad Civil en Colombia, apoyado por la Inter-American Foundation (IAF).

Este boletín busca ser un espacio de análisis pormenorizado del devenir de las tipologías de violencia sociopolítica a saber, derechos humanos, derecho internacional humanitario, acciones bélicas y violencia político-social en el ámbito local y regional en el departamento de Nariño. Además, se hace una selección de algunos hechos de coyuntura que, por su impacto en materia humanitaria y de derechos humanos y por exhibir cierta sistematicidad, son desarrollados más ampliamente.

El boletín **Observando Al Derecho** es un producto del Observatorio Regional de Derechos Humanos y DIH (ORDHDIH), el cual se encarga de acopiar y procesar de manera sistemática, oportuna y veraz la información sobre derechos humanos, DIH e intensidad del conflicto armado, necesaria para producir información estadística y documentos de análisis que contribuyan a la formulación o adecuación de políticas públicas en derechos humanos y DIH.

En esta ocasión el quinto boletín **Observando Al Derecho**, además de abordar las dinámicas de la violencia sociopolítica en el departamento de Nariño, se encargará de abordar de manera más profunda la nueva política antidrogas de Estados Unidos en relación con Colombia, la Política Pública de Paz, Derechos Humanos y DIH del Departamento de Nariño y la coyuntura sobre movilidad humana en la zona de frontera del departamento.



Evolución de la situación de violencia política

De acuerdo con las cifras recogidas por el Observatorio Regional de Derechos Humanos de FUNDEPAZ, al igual que el trimestre pasado, entre los meses de julio y septiembre de 2021 en general la violencia sociopolítica se incrementó de manera importante en un 17% con relación al mismo trimestre, pero del año pasado. Este comportamiento se explica en gran medida por la espiral de violencia que viene afectando al municipio de Ipiales, relacionada con las disputas entre bandas delincuenciales por el territorio y rentas ilícitas donde se concentran los numerosos pasos informales en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana, utilizadas para el contrabando de bienes y para el ingreso al país de manera irregular de migrantes en su mayoría haitianos, pero también de otras nacionalidades como venezolanos y de países asiáticos y africanos.

Lo anterior queda ratificado si se analizan la violencia sociopolítica, pero desde las tipologías que la conforman, observando que fue la violencia político-social la que más variación tuvo en el tercer trimestre de 2021 en el departamento de Nariño con un incremento del 83% entre un trimestre y otro, lo cual se podría explicar a su vez por el aumento en las modalidades tales como el asesinato por intolerancia social, que representó el 68% del total de dicha tipología.

En relación a los presuntos autores de la violencia política en el trimestre en cuestión, con la información disponible se puede decir que en el 85% de las modalidades de violencia sociopolítica ocurrida en el departamento en el tercer trimestre del año 2021 no fue posible determinar la identidad de los mismos, seguidos por disidencia de las FARC y el ELN ambos con el 5% del total, lo cual está en consonancia con el hecho de que haya sido las violaciones a los derechos humanos de mayor incidencia dentro de las tipologías de violencia política.

Como se ha vuelto habitual los datos indican que nuevamente la subregión Pacífico Sur fue el

territorio más afectado por la violencia sociopolítica en el departamento de Nariño en el tercer trimestre de 2021 ya que ahí se produjeron el 37% de todas las modalidades, seguido de la subregión Exprovincia de Obando con el 21% del total y la subregión Telembí con el 15%. Tal como ocurrió en el trimestre pasado las subregiones Sabana y Juanambú no se vieron afectadas de una u otra manera por alguna modalidad de violencia sociopolítica.

A continuación, se presentan algunos indicadores de la dinámica de la violencia sociopolítica en Nariño y su evolución durante el tercer trimestre del año 2021, lo que da una mejor idea de la magnitud de la situación al respecto.

Tabla1
Indicadores varios de violencia sociopolítica
Nariño, julio – septiembre de 2021

Hecho	Cantidad
Desplazamientos colectivos	8
Líderes sociales asesinados	2
Víctimas de minas antipersonales ¹	4
Homicidios ^{2*}	161
Masacres	2
Combates	5

Fuente: CIVIS/Fundepaz. Gobernación de Nariño. *INML: Enero a septiembre. Acción contra las minas.

Como viene ocurriendo con los períodos previos, el tercer trimestre de 2021 siguió mostrando una dinámica preocupante en cuanto algunos indicadores de violencia sociopolítica en el departamento de Nariño ya que se aprecia, aunque en menor medida, la ocurrencia de desplazamientos forzados colectivos que para este período fue de 8 en total, sumando hasta septiembre de 2021 unas 17.672 personas desplazadas que representan 7.013 familias desde comienzo del año. Como ha venido ocurriendo desde el año pasado, los municipio de la subregión del Telembí has sido los más afectados ya que en Magüí Payán en el mes de agosto se presentó el mayor desplazamiento del trimestre que afectó a 1.157 personas (442 familias)³.

Por su parte, el número de masacres pasó de 0 a 2 entre el segundo y tercer trimestre y los combates se mantuvieron en 5 en igual período.

Giro de Estados Unidos en la política antidrogas con Colombia

El pasado 25 de octubre la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (Office of National Drug Control Policy, ONDCP) dio a conocer detalles de la nueva política antidrogas de la administración Biden en relación con Colombia. La estrategia establece el marco para determinar medidas más amplias de éxito en los esfuerzos antinarcóticos en las comunidades rurales para incluir mediciones sobre el acceso a los servicios estatales, la presencia institucional, los ingresos de los productores lícitos y la erradicación de la coca. Como parte de la nueva estrategia, Estados Unidos apoyará los esfuerzos del gobierno colombiano para monitorear y contrarrestar los delitos ambientales que sostienen y alimentan a los grupos narcotraficantes y que tienen un impacto profundamente negativo en el medio ambiente del país y la región amazónica. Esta estrategia respalda la estrategia más amplia de la política de drogas de la Administración de Biden descrita en las Prioridades de Políticas de Drogas para el primer año, que incluyen ampliar el acceso a servicios de prevención, tratamiento, reducción de daños y recuperación basados en evidencia, así como reducir el suministro de drogas ilícitas⁴.

Básicamente la nueva estrategia antinarcóticos entre Estados Unidos y Colombia se centra en tres pilares fundamentales, a saber:

1) Reducción de la oferta de drogas: que incluye la erradicación, la destrucción de laboratorios, la interdicción, la reducción de la demanda de drogas, los esfuerzos contra el lavado de dinero y el enjuiciamiento de los narcotraficantes.

2) Seguridad y desarrollo rural integral: la estrategia incluye consolidar y sostener el progreso a través de la implementación integral del Acuerdo de Paz y una sólida inversión en

desarrollo rural, seguridad ciudadana y acceso a la justicia. Esto incluye proteger a los líderes comunitarios que promueven los esfuerzos del estado de derecho; reducir la dependencia de la coca; ampliar la formalización de la tierra; y cambiar la forma en que Estados Unidos y Colombia miden los avances en la materia.

3) Protección ambiental: Estados Unidos ayudará al gobierno colombiano en sus esfuerzos por monitorear y contrarrestar los delitos ambientales que sostienen y alimentan a los grupos narcotraficantes que tienen un impacto profundamente negativo en el medio ambiente de Colombia. Ambos países se han comprometido a explorar intervenciones adicionales que puedan producir múltiples beneficios, como la restauración de los bosques tropicales, la eliminación de los campos de cultivo de coca, los laboratorios para la producción de cocaína, oportunidades para avanzar en los objetivos del cambio climático en la estratégica región Amazónica. Los esfuerzos incluirán la reforestación y la creación de resiliencia a través de un sólido elemento de vigilancia y patrulla de seguridad.

Lo anterior, al menos en la parte conceptual, constituye un viraje de 180 grados en la política antidrogas del país del norte con Colombia ya que, en un principio, el comunicado de la ONDCP no menciona la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito a través de la aspersión aérea con glifosato, que está suspendida desde 2015 por orden de la Corte Constitucional.

Cabe recordar que la administración pasada en cabeza del presidente Donald Trump (2017-2020) intensificó las presiones a Colombia para reanudar las fumigaciones con glifosato, línea que al parecer continuó su sucesor, Joe Biden, ya que su Gobierno certificó el 1 de marzo pasado a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y, de paso, apoyó el retorno de la aspersión aérea con glifosato, estrategia con la cual ha estado de acuerdo la actual administración del Presidente de Colombia Iván Duque⁵.

Lo anterior resulta alentador para regiones como el departamento de Nariño, especialmente afectadas por el fenómeno del narcotráfico y las consecuencias sociales y ambientales derivadas. Desde estas regiones siempre se han reclamado estrategias integrales para abordar el fenómeno de los cultivos de uso ilícito que vayan más allá de medidas coercitivas de erradicación forzada, incluyendo al glifosato con las cuales se pasa por alto una serie de falencias tales como la debilidad de la presencia del Estado en los territorios más afectados.

De acuerdo con el último informe de UNODC sobre cultivos de coca en Colombia, desde el año 2017 existe una tendencia a la reducción del área cultivada principalmente en Nariño, Putumayo y Caquetá, al sur del país, y en la región oriental, incluyendo Meta, Vichada y Guainía. En Colombia, a 31 de diciembre del 2020, se identificaron 143.000 hectáreas sembradas con coca, lo que representa un 7 % menos que lo reportado en el 2019. Por su parte Nariño mostró una reducción del 17% en el área total se hectáreas sembrada con coca con respecto al año 2019, ocupando el segundo lugar de afectación en todo el país (30.680 hectáreas aproximadamente a 2020), después de Norte de Santander que se consolida como el departamento con mayor área sembrada en el país, con 40.084 hectáreas⁶.

Este viraje de la política antidroga estadounidense puede llegar a representar una oportunidad para regiones como Nariño donde se vienen adelantando estrategias territoriales para abordar de manera alternativa el problema del cultivo de la coca. En la actualidad el Gobierno Departamental viene implementando en zonas especialmente afectadas por el narcotráfico como por ejemplo Tumaco la estrategia Acuerdos de Raíz que es el programa para darle continuidad a la sustitución voluntaria de los cultivos de coca por proyectos productivos con familias comprometidas cien por ciento con la legalidad para transformar el territorio.

Dicho programa ha sido apoyado por la Consejería para la Estabilización y Consolidación de la Dirección de Sustitución de Uso Ilícito –

DSCI del Programa PNIS en el proceso con el Consejo Comunitario Río Chagüí, donde la Dirección de Cultivos viene desarrollando una labor muy importante con más de 2.000 familias para tener un consejo comunitario libre de coca⁷.

En otros municipios como Leiva, El Rosario, Policarpa y demás municipios de cordillera, pie de monte costero y costa pacífica se ha implementado un proceso de diálogo y concertación para la sustitución, por ello reiteró que existe voluntad y acciones desde Nariño para concertar la sustitución.

La frontera colombo-ecuatoriana otro foco de conflictividad en Nariño

En el marco de la pandemia del Covid 19 que viene afectando al mundo entero desde el segundo trimestre del año pasado, el año 2021 marca el inicio del proceso de reactivación económica y social de casi todos los sectores en nuestro país de cara a superar las nefastas consecuencias originadas provocadas por las medidas restrictivas para contener la pandemia.

A la par con esta paulatina recuperación de la dinámica social y económica también empezó a normalizarse el flujo de personas en zonas fronterizas de Nariño, pese a la negativa de las autoridades del Ecuador de reabrir los pasos fronterizos oficiales con Colombia, quedando como alternativa en la movilidad humana entre ambos países los diferentes pasos ilegales que permean la zona. Las autoridades de ambos países coinciden en que, tras el cierre de los puentes binacionales de Rumichaca y San Miguel, y los pasos fronterizos de Tufiño, Urbina y El Carmelo, los pasos no autorizados pasaron de 35 a 100 durante la pandemia⁸.

Como parte de este incremento en la dinámica de la movilidad humana producto del proceso de reactivación económica y social vivido sobre todo en lo que va del año 2021 aunado decisiones políticas externas sobre temas migratorios en los Estados Unidos, en estos últimos meses se ha incrementado de manera importante el aumento del flujo migratorio

internacional hacia ese país, siendo Colombia un país de tránsito.

Enero de 2021 fue el mes en el que tomó posesión el nuevo gobierno de Joe Biden y con él un viraje en la política migratoria de ese país, prometiendo ser más flexible en relación a la política implementada por su predecesor, Donald Trump. Cabe recordar que este último impulsó la política de tolerancia cero que incluyó la construcción de un muro, la militarización la frontera, permitiendo el enjuiciamiento penal por el cruce irregular de la frontera, la separación de miles de menores de sus padres y el condicionamiento de las ayudas a la región por no controlar la migración. Descuidó y menospreció sus relaciones con el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), incluso reduciendo la ayuda exterior como una herramienta política eficaz para la región hasta en un 75%⁹.

Desde que Joe Biden llegó a la presidencia no sólo ha revertido varias de esas medidas (rescindió la política de tolerancia cero, reactivó los acuerdos de asilo con los 3 países, así como el programa de reagrupación familiar de niños centroamericanos cuyo padre o madre residiera legalmente en EE UU), sino que ha reorientado su política hacia la región, activando una intensa agenda política y diplomática. A diferencia de Trump, Biden apuesta por la gobernanza internacional y regional.

Recientemente el gobierno de Joe Biden ha tratado por segunda vez de poner fin a la controvertida política de "Remain in Mexico" (Permanecer en México) del expresidente Donald Trump, después de que fuera frustrada a principios de este año por un juez federal¹⁰.

La combinación de estos factores, por un lado, el viraje favorable de la política migratoria de Estados Unidos y por el otro, la lenta recuperación económica de la mayoría de los países de América Latina, ha provocado en los últimos tres meses un aumento inusitado del flujo de migrantes en su mayoría haitianos desde los países que los acogieron en el año 2000 (Chile y Brasil), después del terremoto que devastó ese país, hacia los Estados Unidos con

la perspectiva de un cambio sustancial para su situación.

En ese flujo de personas Colombia es un país de tránsito donde las autoridades han identificado nueve rutas que están siendo utilizadas por organizaciones ilegales que se benefician del ingreso de migrantes, en su mayoría haitianos y algunos cubanos. En la ruta más común los extranjeros ingresan al continente por Brasil, se trasladan al Ecuador y logran ingresar a Colombia por las trochas y la frontera cerca a Ipiales, luego toman buses que los lleven a ciudades como Cali y Medellín, para finalmente llegar al Golfo de Urabá. Una de las rutas nuevas inicia desde el municipio de Tumaco, en Nariño, allí toman lanchas que los llevan a Buenaventura, continúan hasta bahía Solano y terminan en Jurado, en el departamento del Chocó.¹¹.

Quienes ingresan desde Chile también lo hacen a través de buses por Perú, Ecuador y finalmente Colombia. De acuerdo con Migración Colombia, en lo corrido de este año hasta septiembre, han sido detectados más de 67 mil migrantes irregulares, de nacionalidades diferentes a la venezolana, a lo largo y ancho del territorio nacional y ha detenido a 90 personas vinculadas con redes de tráfico de migrantes. Según la Subdirección de Verificaciones de esa entidad, más del 90% de los migrantes que ingresan de manera irregular al territorio nacional lo hacen por el departamento de Nariño¹².

Este incremento en la movilidad de extranjeros a través de los pasos ilegales en la frontera entre Colombia y Ecuador en el departamento de Nariño ha resultado de interés para las bandas delincuenciales que delinquen en la región. La situación se ha complicado producto de la rivalidad que mantienen las bandas violentas Tren de Aragua, de Venezuela, y La Segunda Marquetalia, conformada por disidentes de la guerrilla colombiana, según inteligencia policial colombiana¹³.

Esto ha provocado una disputa por el control territorial de los pasos informales y las rentas generadas por el tráfico de los migrantes resueltos a utilizarlas. Consecuencia de eso el

municipio de Ipiales ha sufrido en los últimos meses una ola de violencia, evidenciada en continuos asaltos con armas, robos de fuertes sumas de dinero, muertes violentas y presencia de sicarios. Y es que en menos de 30 días del mes de septiembre fueron asesinadas en ese municipio 6 personas y los asaltos utilizando motocicletas y otros vehículos siguen en aumento¹⁴. Durante el trimestre que cubre este informe en la subregión de la Exprovincia de Obando se han presentado 13 asesinatos por intolerancia social, 2 de los cuales eran de nacionalidad venezolana. Prácticamente todos esos homicidios ocurrieron en el municipio de Ipiales.

Nariño tendrá una política pública departamental en derechos humanos

Desde el año pasado la Subsecretaría de Paz y Derechos de la Gobernación de Nariño con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) viene implementando la Política Pública de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Departamento de Nariño (2021-2034) en el marco de la carta de entendimiento firmada el 06 de junio de 2017 entre la Gobernación de Nariño y USAID.

En el proceso de diálogo y consenso con diversos sectores y organizaciones sociales presentes en el territorio se ha podido avanzar en la identificación de cinco ejes temáticos de la política pública departamental de derechos humanos a saber. 1) Acuerdo final para la terminación del conflicto en el departamento de Nariño; 2) Derechos civiles y políticos; 3) Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); 4) Grupos armados ilegales generadores de conflictos y violaciones al DIH y 5) Gobernabilidad y gobernanza territorial.

Aunque en principio la fase de validación y aprobación de la política pública estaba programada para llevarse a cabo entre los meses de junio y julio de 2021, por diversos motivos, entre ellos la pandemia del Covid 19, esto no ha sido posible, esperando hacerlo

durante el primer trimestre el año 2022. Pese a las dificultades, hasta el mes de octubre de 2021 el equipo promotor de la Política ha avanzado en la fase de diálogos territoriales, temáticos y étnicos para la construcción diagnóstica y la sistematización de propuesta preliminar.

La fase de los diálogos territoriales se ha implementado desde primero, una perspectiva temática donde se ha articulado trabajo con sectores de especial protección constitucional (mujeres, jóvenes, adulto mayor, infancia y primera infancia, grupos étnicos, LGBTI, entre otros) y sectores representativos como universidades, gremios, organizaciones de cooperación internacional y demás. En segundo lugar, desde una perspectiva étnica a través de la cual se ha articulado con comunidades indígenas, afrodescendientes y población room, que permita ratificar dentro de la política el enfoque diferencial, desde la diversidad y la no discriminación. Finalmente, desde una perspectiva territorial como tal con la cual se ha pretendido conocer las realidades sociales, políticas, económicas y ambientales de los 64 municipios del departamento.



Hasta la fecha en el marco de esta fase se ha podido lograr llegar hasta 47 municipios de 12 subregiones del departamento a saber: Centro, Guambuyaco, Exprovincia de Obando, Occidente, Pacífico Sur, Piedemonte Costero, Sanquianga, Telembí, Exprovincia de Obando, Abades y Cordillera. Además, se han implementado 6 talleres temáticos con poblaciones con discapacidad, personas del sector cultural, con organizaciones de mujeres parte de la plataforma Prodefensoras de Derechos Humanos, con Secretarios de

Gobierno de diversos municipios del departamento, con reincorporados (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Tumaco) y con integrantes de Juntas de Acción Comunal.



www.fundepaz.org



facebook.com/fundepaz



twitter.com/fundepaz



youtube.com/fundepaz

CONTÁCTENOS

Dirección: Calle 13 No. 30A – 27, barrio San Ignacio. Pasto – Nariño – Colombia.

Teléfono: (092) 7215966

WhatsApp: 3108498926

E-mails: infofundepaz@gmail.com
[/info@fundepaz.org](mailto:info@fundepaz.org)

SÍGANOS

Notas finales

¹ ACCIÓN CONTRA LAS MINAS. Registro de información de afectación por MAP y MUSE e intervención [en línea]. <

<http://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/Base%20v%c3%adctimas%2030%20de%20septiembre%202021.xlsx>> [Citado el 30 de Octubre de 2021]

² INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Información preliminar de lesiones fatales de causa externa en Colombia. Enero a septiembre de 2021 [en línea].

<<https://drive.google.com/uc?id=13f33A25hce5GSCDlFALCjzj8trOcPhus&export=download>> [Citado el 30 de Octubre de 2021]

³ Análisis hecho en base a información aportada por la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño

⁴ The White House. The White House Releases Details of the New, Holistic U.S.-Colombia Counternarcotics Strategy [en línea].

<<https://www.whitehouse.gov/ondcp/briefing-room/2021/10/25/the-white-house-releases-details-of-the-new-holistic-u-s-colombia-counternarcotics-strategy/>> [Citado el 27 de Octubre de 2021]

⁵ El Colombiano. Giro del Gobierno Biden en política antidrogas con Colombia [en línea].

<<https://www.elcolombiano.com/internacional/estados-unidos-cambia-politica-de-lucha-antidrogas-en-colombia-BJ15941213>> [Citado el 28 de Octubre de 2021]

⁶ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020 [en línea].

<https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2020.pdf>

[Citado el 4 de Octubre de 2021] p. 14, 25

⁷ GOBERNACIÓN DE NARIÑO. Consejería para la Estabilización y Consolidación Respalda los Acuerdos de Raíz como estrategia de sustitución [en línea]. <<https://sitio.narino.gov.co/0547-3/>> [Citado el 28 de Octubre de 2021]

⁸ El Universo. Unas 100 rutas irregulares se abren paso en la frontera a propósito de la pandemia del COVID-19 [en línea].

<<https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/17/nota/9592615/100-rutas-irregulares-se-abren-paso-frontera-proposito-pandemia/>> [Citado el 30 de Octubre de 2021]

⁹ Esglobal. Depende: seis meses de política migratoria en la era Biden [en línea].

<<https://www.esglobal.org/depende-seis-meses-de-politica-migratoria-en-la-era-biden/>> [Citado el 30 de Octubre de 2021]

¹⁰ CNN Español. El gobierno de Joe Biden intenta otra vez acabar con una política migratoria de Donald Trump [en línea].

<<https://cnnspanol.cnn.com/2021/10/29/biden-politica-migratoria-trump-trax/>> [Citado el 30 de Octubre de 2021]

¹¹ RCN Noticias. Estas son las nuevas rutas usadas por migrantes haitianos para ingresar al país [en línea].

<<https://www.noticiasrcn.com/colombia/rutas-utilizadas-por-migrantes-haitianos-para-ingresar-a->

[colombia-385826](#)> [Citado el 30 de Octubre de 2021]

¹² Migración Colombia. En el último mes, migración Colombia ha detectado más de 34 mil migrantes irregulares, una cifra equivalente al 51% del total de detecciones de este 2021. [en línea].

<<https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/en-el-ultimo-mes-migracion-colombia-ha-detectado-mas-de-34-mil-migrantes-irregulares-una-cifra-equivalente-al-51-del-total-de-detecciones-de-este-2021>> [Citado el 30 de Octubre de 2021]

¹³ El Universo. Identificadas dos bandas que se disputan violentamente las trochas entre Colombia y Ecuador y causan temor en Ipiales y Tulcán [en línea].

<<https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/bandas-se-disputan-violentamente-las-trochas-entre-colombia-y-ecuador-generando-temor-en-ipiales-y-tulcan-nota/>> [Citado el 30 de Octubre de 2021]

¹⁴ Ibid.